

Santiago, quince de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos antecedentes Rol de ingreso Corte Suprema N° 160269-2022, por sentencia de dos de Marzo de dos mil veinte, dictada en los autos Rol C-34256-2017 del 7° Juzgado Civil de Santiago, se resolvió; acoger la demanda debiendo el Fisco pagar la suma de \$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos) al demandante Ernesto Galaz Guzmán.

La referida sentencia fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado, recurso que fue conocido por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, en Rol N° 6241-2019, por fallo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, revocó la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil veinte, dictada por el 7° Juzgado Civil de esta ciudad, y se decide, en cambio, que se acoge la excepción de pago opuesta por el demandado rechazándose la demanda, sin costas.

Contra esta última decisión, la demandante dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación con fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

1°) Que, el demandante denuncia la aplicación errónea del Derecho y la forma específica en que se produce este vicio jurídico, radica en que los sentenciadores han infringido lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República y al artículo 657, numeral 4° del Código de Procedimiento Penal, referido al recurso de revisión que, con la interpretación de la Corte de Apelaciones que se denuncia, hace inaplicable el artículo 19, N°7, letra i) de la Constitución Política de la República.



Indica que está determinado, por mandato constitucional, que el procedimiento no tiene más finalidad que determinar el monto de la indemnización reclamada conforme al mérito del proceso, es absolutamente improcedente privar a su parte de su derecho constitucional de reparación integral, la que tiene su fundamento en la posibilidad real de ser juzgado conforme a un debido proceso e implica desconocer lo resuelto por esta Corte Suprema al acoger el recurso de revisión y consecuentemente absolver a su defendido.

Pide que declare que la resolución recurrida es nula, toda vez que se han verificado los yerros jurídicos denunciados por esta parte y, acto seguido y sin nueva vista, dicte sentencia de reemplazo, por la cual se rechaza la excepción de pago opuesta por el demandado Fisco de Chile, confirmando la sentencia de primera instancia que dio lugar a la indemnización de perjuicios demandada por su representado, en el monto fijado por el sentenciador de primera instancia o aquel que en definitiva determine esta Corte Suprema, con costas de la causa.

2º) Que los antecedentes del proceso que interesan al recurso en análisis, consignados en el considerando segundo del fallo de la Corte de Apelaciones son los siguientes:

“1.- Que Eugenio Galaz Guzmán fue detenido el año 1973 luego del golpe militar, y condenado por los Consejos de Guerra a la pena de muerte en causa Rol 1-73, la que fue modificada el año 1978, por la pena de extrañamiento a Bélgica, donde permaneció por 11 años, hasta su retorno a Chile.

2.- Que en causa Rol 27.543-2016, la Excm. Corte Suprema acogió un recurso de revisión de las sentencias de los Consejos de Guerra, invalidándolas y declarando la absolución de Galaz Guzmán.



3.- Que en causa Rol 11486-2017, por sentencia de 06 de noviembre de 2017, la Corte Suprema acogió la solicitud de declaración previa de error judicial formalizada por Ernesto Galaz Guzmán y declaró que las sentencias condenatorias dictadas por los Consejos de Guerra convocados el 30 de julio de 1974 y 27 de enero de 1975, son injustificadamente erróneas.

4.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 2 de septiembre del año 2015, acogió la pretensión del actor, y otorgó a Eugenio Galaz junto a otras 12 víctimas condenadas en el proceso 1-73, una indemnización compensatoria por el daño material e inmaterial, declarando responsable al Estado de Chile condenándolo a la suma de US\$ 25 mil dólares, entre otras acciones de reparación.

La sentencia determinó la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración del derecho a la protección judicial contenido en el artículo 25 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 por la falta de recurso efectivo para la revisión de las sentencias condenatorias.

El fallo además del pago en dinero a modo de indemnización, ordenó la difusión de la sentencia, un acto público de reconocimiento junto a una placa recordatoria de las víctimas y, en el plazo de un año, un mecanismo efectivo para revisar y anular las sentencias condenatorias de los Consejos de Guerra.

5.- Que por Resolución exenta N° 5268 de 9 de diciembre de 2015 el Estado de Chile cumplió la sentencia de la Corte Interamericana y ordenó el pago de US\$25 mil dólares al actor;

3º) Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 2 de septiembre del año 2015 se pronunció sobre el caso “Omar Humberto



Maldonado Vargas y otros contra la República de Chile”. La CIDH llega a concluir que, por cualquiera de los motivos anteriores, las personas condenadas por las sentencias de los Consejos de Guerra durante la dictadura siguen sin contar con un recurso adecuado y efectivo que les permita revisar las sentencias en el marco de las cuales fueron condenados. En consecuencia, concluye que el Estado de Chile es responsable por la violación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno contenido en el artículo 2 de la Convención, en relación con el artículo 25 del mismo instrumento, por la falta de un recurso que sea adecuado y efectivo para revisar las sentencias de condenas emitidas por los Consejos de Guerra en perjuicio de Omar Humberto Maldonado Vargas, Álvaro Yáñez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Oyanedel, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza, e Ivar Onoldo Rojas Ravanal.

4º) Que esta Corte Suprema con fecha tres de octubre de dos mil dieciséis resolvió, acoger la solicitud de revisión e invalidó las sentencias dictadas en los Consejo de Guerra convocados con fecha 30 de julio de 1974 y 27 de enero de 1975 y, en consecuencia, se anuló todo lo obrado en los autos Rol N° 1-73 de la Fiscalía de Aviación y se declara que se absuelve al demandante, por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia.

5º) Que en la referida sentencia en su considerando trigésimo tercero, se estableció *“que demostrada entonces la existencia de un método, patrón o sistema general de menoscabo físico o mental y de afrenta a su dignidad, al que eran sometidos quienes fueron acusados ante los Consejos de Guerra*



convocados en la causal Rol N° 1-73 de la Fiscalía de Aviación, cometido por parte de sus interrogadores, celadores u otros funcionarios que intervinieron en el procedimiento mientras dichos acusados eran mantenidos detenidos en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, se acredita que las confesiones e imputaciones a los demás detenidos fueron obtenidas con violación del artículo 11 de la Constitución de 1925, el que disponía que “Nadie puede ser condenado, si no es juzgado legalmente”, mientras el Código de Procedimiento Penal de la época, aplicable supletoriamente al Código de Justicia Militar, que trata los procedimientos ante el Consejo de Guerra, prescribe en su artículo 481 N° 2 que la confesión del procesado podrá comprobar su participación en el delito sólo cuando “sea prestada libre y conscientemente”, en concordancia con el artículo 18, inciso 2°, de dicha Constitución, que prescribe que en las causas criminales “No podrá aplicarse tormento”. Constatada tal infracción a la Constitución y ley procesal vigente a la sazón, cabe concluir que dichas confesiones no podían sustentar las condenas impuestas a los acusados”.

6°) Que, de lo expuesto surge, que no es solo la denegación de justicia lo reprochable al Estado, sino que la utilización de tortura como método patrón o sistema general de menoscabo físico o mental y de afrenta a la dignidad. Consecuentemente son los daños derivados de las torturas recibidas lo que debe repararse, así las cosas la excepción de pago acogida por el tribunal de segunda instancia, importa una limitación al derecho que, por regla general, tienen las partes para ser debida e íntegramente indemnizadas de todo daño sufrido.

Que es un principio general de derecho internacional, el que los Estados se obligan a cumplir los tratados de buena fe. Por lo anterior, el Estado no puede



descansar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales porque se lo impide su legislación interna (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), dado que tiene que observar las disposiciones del tratado en toda su integridad; máxime si el tratado a aplicar, ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico para su promulgación.

Que, respecto a tales delitos y conforme al derecho internacional humanitario, corresponde al Estado (de Chile), luego de investigar los hechos y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, sean directas o indirectas, además de garantizar la no reiteración de aquellos. Tales obligaciones tienen carácter internacional y tienen como fuente un conjunto de convenciones y el derecho consuetudinario;

7º) Que el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece con claridad dos de las obligaciones más importantes que nacen para los Estados partes, estas son: las de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce. Por consiguiente, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados partes, las consecuencias o efectos jurídicos de estas obligaciones, son la exigibilidad inmediata de respeto de los derechos humanos y, en el plano individual, la tiene frente a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

En consecuencia, la obligación de respetar dicho ejercicio y goce, exige al Estado y a todos sus agentes abstenerse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana.



Por su parte, la obligación de garantizar, exige al Estado el deber ineludible de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción, siempre estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra;

8º) Que, en relación a lo anterior, en el Caso “Velásquez Rodríguez con Estado de Honduras”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que dicha obligación implica que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento -si es posible- del derecho conculcado y, en su caso, *“la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”*;

9º) Que la existencia de todas las situaciones referidas precedentemente, fuerza a considerar si en el presente caso, el deber de otorgar una reparación integral por violaciones a los derechos humanos contemplado en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos, impide o no aplicar la regla legal que dispone la excepción de cosa juzgada.

Sin embargo, para tal determinación no es posible acudir únicamente a la normativa de la Convención. Se debe considerar, además, la interpretación que de tales disposiciones ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto la eficacia vinculante de sus interpretaciones deriva de la decisión



soberana del Estado de Chile de reconocer “incondicionalmente” como “obligatorias de pleno derecho” sus sentencias, en lo relativo a la aplicación de la Convención, pero también a su interpretación, según se desprende del artículo 62 de la Convención y lo confirma la declaración que acompaña el instrumento de ratificación respectivo, aprobada por el Congreso Nacional, como consta en el oficio N°458 de fecha 14 de Agosto de 1990 del Honorable Senado y del que da cuenta el Decreto N°873 del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el que “Aprueba Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica”;

10°) Que, por consiguiente, resulta imprescindible entonces tener presente la interpretación que la Corte Interamericana ha realizado del artículo 63.1 de la Convención, la que, en un caso reciente, en el que precisamente declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por un asunto idéntico a la demanda de autos, estableció que, consecuentemente con el cambio jurisprudencial reconocido por esta Corte Suprema en orden a no declarar la prescripción civil a acciones que procuren reparaciones por perjuicios morales ocasionados por violaciones a los derechos humanos, *“en este tipo de casos el instituto de la cosa juzgada no debería constituir un obstáculo para que las víctimas del presente caso –o personas que se encuentren en situaciones análogas– puedan finalmente acceder a las reparaciones que les puedan corresponder por vía judicial”* (Caso Órdenes Guerra y Otros VS. Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 114”).

De manera que, así entendido, el artículo 63.1 de la Convención no sólo impone a esta Corte el deber de abstenerse de declarar prescritas las acciones de



esta clase; sino también la obligación de garantizar que la regla del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil no vuelva a representar un obstáculo o una restricción desproporcionada en la posibilidad de obtener una reparación por las consecuencias de las actuaciones estatales que han configurado la vulneración de los derechos cuya protección se reclama;

11º) Que tal conclusión, resulta además coherente con lo dispuesto en el artículo 2º de la misma Convención Americana, en tanto dispone que el Estado se ha comprometido a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas “o de otro carácter” que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que ella reconoce.

Lo anterior, concuerda igualmente con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en tanto establecen respectivamente que “*Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe*”, y que “*Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado*”; y con lo dispuesto en el artículo 5 inc. 2º de la Constitución Política de la República; todo lo cual permite concluir que en el caso en estudio, el tribunal de alzada no debió confirmar la aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil;

12º) Que, en concordancia a este razonamiento y, de acuerdo también al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por



Chile y que se encuentren vigentes; el Estado debe cumplir con las normas sobre derechos humanos y, al implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el derecho interno, de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de Convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia, sin que ninguna norma del derecho interno permita distinción alguna que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad;

13°) Que, decidir lo contrario, implicaría no únicamente invocar disposiciones de Derecho interno para justificar el incumplimiento del deber de otorgar una reparación integral que impone un tratado internacional sobre derechos humanos ratificado y vigente; sino además -y de modo más grave aún- significaría comprometer una vez más la responsabilidad internacional del Estado, al privar a los recurrentes, por segunda vez, del derecho a la tutela judicial efectiva que bajo la interpretación de la Corte Interamericana comprende la obligación estatal de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos humanos y fundamentales; obligación que *“no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales. Más bien, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial son “verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación”* (Caso



Pueblo Indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012 (fondo y reparaciones), párr. 261; y ya antes en Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 177).

Así, lo expresado con precedencia, no ha podido acontecer en la especie, por cuanto en el primer juicio se rechazó la demanda por haber estimado prescrita la acción reparatoria y, en el segundo –cuya decisión de segunda instancia se impugna por esta vía-, se rechazó igualmente la demanda por haberle reconocido al Fisco la excepción de cosa juzgada, sin que en ninguno de los dos juicios se haya alcanzado a establecer la existencia o no de una violación a los derechos humanos, con la consecuente imposibilidad de acceder a la reparación integral que pudiere haber resultado procedente;

Por tanto, como se ha venido reflexionado, existe el error de derecho que se denuncia por el recurrente en la sentencia en examen, de suerte tal que el recurso de casación en el fondo será acogido.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso de casación en el fondo, deducido la parte demandante, en contra de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol N° 6241-2019, la que en consecuencia es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito

Rol N° 162.269-2022



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., Sra. María Teresa Letelier R. y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. No firman la Ministra Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por con permiso y ausente respectivamente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 15/11/2023 14:17:12

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 15/11/2023 14:17:12

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 15/11/2023 14:17:13



En Santiago, a quince de noviembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, quince de noviembre de dos mil veintitrés.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos:

Se reproduce íntegramente la sentencia en alzada.

Del fallo de casación que precede, se reiteran sus motivos 6° a 15°.

Y se tiene además presente:

Que de los hechos asentados en autos surge, de manera inconcusa, que el actor don Ernesto Augusto Galaz Guzmán ha padecido dolor, sufrimiento y angustia por la detención y posteriores apremios físicos y psíquico sufridos en manos de agentes del Estado, lo que por sí solo constituye un daño moral que debe compensarse por el Fisco de Chile.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 170, 186, 187 y 227 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 6, 38 y 19 Nros. 22 y 24 de la Constitución Política de la República, **se confirma** la sentencia apelada de dos de Marzo de dos mil veinte, pronunciada en los autos Rol N° C-34256-2017 del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios por la responsabilidad extracontractual del Estado.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito

Rol N° 160.269-2022

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., Sra. María Teresa Letelier R. y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. No firman la Ministra



Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por con permiso y ausente respectivamente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ
MINISTRO
Fecha: 15/11/2023 14:17:14

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 15/11/2023 14:17:15

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 15/11/2023 14:17:15



En Santiago, a quince de noviembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

